

**José Gerardo Atehortúa Cruz**

**Abogado – Derecho Penal**

Carrera 4 # 11-45 Oficinas 709 – 711

Teléfonos: 8805981 – 8817186 Fax: 8850239

E. Mail: gerardoderechopenal@yahoo.es

Santiago de Cali

Señores:

**HONORABLE CONSEJO DE ESTADO.**

Secretaría General.

Bogotá.

**REF: Acción de Tutela** contra la Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799).

**Víctimas del poder:** Cristian Ramírez Pontón, sus hijas Katherine y Vanessa Ramírez Tobar; su compañera permanente Luz Stella Hincapié García y sus hijos comunes Christian Esteban y Joan Sebastián Ramírez Hincapié; sus padres Miguel Angel Ramírez y Martha Lucía Pontón de Ramírez; sus hermanos Betty Lucy, Miguel Angel y Fredeth Ramírez Pontón. **Demandada:** La Nación-Fiscalía General de la Nación.

Cordial saludo.

**José Gerardo Atehortúa Cruz**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 14'871.360 de Buga, portador de la tarjeta profesional de abogado 11.041 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio profesional en la carrera cuarta número 11-45, Edificio Banco de Bogotá de la Plaza de Caicedo, oficinas 709 y 711, teléfono 8805981, correo electrónico gerardoderechopenal@yahoo.es, respetuosamente acudo ante esa entidad para reclamar mediante procedimiento preferente y sumario la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales que luego se especificarán; acción de tutela de la cual trata el artículo 86 de la Constitución

Política que fuera reglamentado especialmente por el Decreto 2591 de 1991, y que se consigna en los acápite siguientes:

# 1

## De los legitimados en la acción

---

Tienen legitimidad e interés para ejercer esta acción el señor Cristian Esteban Ramírez Pontón, injustamente privado de la libertad, sus hijas Katherine y Vanessa Ramírez Tobar; su compañera permanente Luz Stella Hincapié García y sus hijos comunes Christian Esteban y Joan Sebastián Ramírez Hincapié; sus padres Miguel Angel Ramírez y Martha Lucía Pontón de Ramírez; sus hermanos Betty Lucy, Miguel Angel y Fredeth Ramírez Pontón; quienes tienen el carácter de *víctimas del abuso de poder* al tenor de los “Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder” adoptados por la Asamblea General en Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985.

# 2

## De la Sentencia demandada

---

Esta acción de tutela se dirige contra la Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto SÁCHICA Méndez; Sentencia que fuera debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020 (menos de seis meses), como consta en print de la Consulta de Procesos [Anexo uno].

Esta Sentencia revocó la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 19 de agosto de 2014, denegando las pretensiones de la demanda de reparación directa en el proceso que bajo radicación número

760012333000201200476 01 fuera propuesto por las señaladas víctimas del poder.

# 3

## Hechos u omisiones que motivan la acción

---

La Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto SÁCHICA Méndez; Sentencia que fuera debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020, en párrafo que puede llamarse como de conclusión impone que

Por consiguiente, el actuar del Estado en la persecución del delito, como elemento fundante de las bases de la subsistencia y de desarrollo de la sociedad, en el marco de las exigencias legales que imponen límites materiales y formales a su obrar, de cara al respeto, protección y garantía de los derechos de los administrados, y de manera especial, al derecho a la libertad, no revela en este caso, que las decisiones y medidas proferidas por la Fiscalía General de la Nación en contra del demandante fueron injustas, sino bien por el contrario, el resultado del análisis de los requisitos que el estatuto procesal y sustantivo penal vigente para esa época exigían.

Postulando luego:

De acuerdo con lo anterior, el llamado de la entidad pública recurrente para que el proveído apelado sea revocado, será atendido, en tanto para la Sala el contexto fáctico del proceso, las actuaciones de las autoridades que participaron, y el fiel seguimiento de los condicionamientos que la ley impuso a la Fiscalía en materia de detención del señor Ramírez Pontón, no permiten apoyar la definición de la responsabilidad deprecada en la demanda (...) [Los resaltados fuera del texto original].

Así pues, este y otros párrafos igualmente cuestionables que sirven de meras motivaciones argumentativas para negar las pretensiones de la demanda y que responden a un simple criterio de autoridad, sin razonamiento esencial o de fondo, constituyen una manifiesta vía de hecho o por defecto procedimental o por defecto fáctico, como luego se demostrará en esta acción constitucional.

Para comprobar los defectos en que incurre el fallo cuestionado y que hacen imperativo tutelar los derechos fundamentales de los aquí accionantes, partimos en primer lugar de un Principio Universal en los Estados democráticos: la privación de la libertad para personas acusadas de una infracción penal no debe ser la regla general sino una excepción. Así deviene, por ejemplo, del artículo 9.3 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de Diciembre de 1966 y con Entrada en vigor el 23 de marzo de 1976]; artículo en cita que así dispone de manera expresa:

(...) La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo [Lo subrayado fuera del texto original].

Este Principio consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace parte de nuestra legislación interna. No sólo por el llamado *Bloque de Constitucionalidad*, cuando la Carta Política establece en su artículo 93 que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”; complementando en su inciso segundo que “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”; sino también y muy especialmente porque dicho Pacto Internacional entró en vigor para Colombia el 23 de marzo de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968.

Por si fuera poco, el artículo 28 de nuestra Constitución señala que nadie puede ser reducido a prisión o arresto, ni detenido, “... sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” [Lo resaltado fuera del texto legal].

La Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha en que se dictó la medida de aseguramiento en contra del señor Cristian Ramírez Pontón, en su Título Preliminar contempla dos normas rectoras sobre la privación de la libertad; normas que como tales son obligatorias y prevalentes sobre cualquiera otra disposición y que deben ser utilizadas como fundamento de interpretación como así lo dispone el Principio rector de Prevalencia consagrado en el artículo 24 de la citada ley. Pues bien, los artículos pertinentes se transcriben así:

**Artículo 2º. Integración.** En los procesos penales se aplicarán las normas que en materia de garantías se hallan consagradas en la Constitución Política y en los Tratados y Convenios internacionales ratificados por el Estado Colombiano.

**Artículo 3º. Libertad.** Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni privado de su libertad, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

**La detención preventiva, en los términos regulados en este código, estará sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad [Lo resaltado fuera del texto legal].**

No solo con el definido propósito de acertar en la exposición de los cargos contra la Sentencia administrativa y en la demostración de los defectos procedimentales y fácticos que la muestran como una vía de hecho, sino también por estrictas razones metodológicas, este acápite de origen legal lo escindimos así:

### **3.1. Primer cargo.**

Ni la Fiscalía General de la Nación a través de su delegada la Fiscalía Décima Especializada adscrita a la Unidad Nacional para la Extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, ni el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, tuvieron en cuenta los fines constitucionales de la medida de aseguramiento exigidos por Constitución y la ley procedimental penal como formalidad legal para privar de la libertad al señor Cristian Ramírez Pontón; y la segunda para determinar la injusticia de dicha medida, el daño antijurídico causado por la omisión de la autoridad y la reparación de los perjuicios atinentes.

### **Demostración del cargo.**

Para decretar una medida privativa de la libertad, es imperioso mirar en primer lugar el expreso y contundente contenido del artículo 355 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal que, desarrollando el inciso segundo del artículo tercero del mismo código manda la comprobación de los **Fines constitucionales** de la medida de aseguramiento, señalando expresa y obligatoriamente que

La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.

Esta exigencia procesal que viene a constituir una formalidad legal desde la perspectiva de las garantías constitucionales, las normativas internacionales adoptadas por nuestra legislación interna o bloque de constitucionalidad y nuestro Código de Procedimiento Penal, es apenas una mera e intrascendente referencia en la sentencia administrativa que no miró si la Fiscalía General de la Nación le dio estricto cumplimiento cuando decretó la privación de la libertad del señor Cristian Ramírez Pontón, incurriendo así la decisión ahora cuestionada en una manifiesta vía de hecho por **defecto procedimental absoluto** cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido<sup>1</sup>; que se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia

[...] se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso<sup>2</sup> O porque iii) pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales [...]<sup>3</sup>.

Sin que sea necesario incurrir en múltiples, extensas y odiosas transcripciones, el tema es suficientemente aclarado tanto por la Corte Constitucional, como por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La primera advierte en Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 que

Bajo esta consideración, para que proceda la detención preventiva no sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que **se requiere, además, y con un ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla sustente su**

---

<sup>1</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.

<sup>2</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.

<sup>3</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-620 de 2013.

**decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma [Negritas fuera del texto original].**

A su vez, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal dejó expresamente sentado en Sentencia de junio 18 de 2002, radicación 18056, con la ponencia del doctor Fernando E. Arboleda Ripoll que

De esta manera, la detención no se vincula tan sólo con el cumplimiento de los requisitos formales y materiales exigidos por el ordenamiento jurídico, sino también con los fines establecidos para ella, **debiendo el juzgador en cada caso verificar la necesidad de imponerla de conformidad con los propósitos de asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, preservar la prueba y proteger la comunidad [Negritas fuera del texto original].**

Y como bien puede verse en las Resoluciones interlocutorias de la Fiscalía General de la Nación **NO EXISTE** ni aquí, ni a lo largo de las páginas en que se discurre sobre la situación del señor Ramírez Pontón, un elemento mínimo de convicción, ni examen conciso o concreto, que expliquen la necesidad de la medida de aseguramiento en su contra, sea porque es posible que se sustraiga al cumplimiento de la sentencia, o que obstruya la justicia, o que sea un peligro para la comunidad y que, consecuencialmente, indiquen que la Fiscalía cumplió a cabalidad con la **formalidad legal** de los **Fines constitucionales**, exigidos jurisprudencialmente como “*ineludible alcance de garantía*”; configurándose así de manera incuestionable el aludido defecto procedimental absoluto al proponerse en la Sentencia administrativa que las decisiones y medidas proferidas por la Fiscalía General de la Nación fueron “(...) el resultado del análisis de los requisitos que el estatuto procesal y sustantivo penal vigente para esa época exigían o que el “fiel seguimiento de los condicionamientos que la ley impuso a la Fiscalía en materia de detención” del señor Ramírez Pontón, no permiten apoyar la definición de la responsabilidad deprecada en la demanda (...) [Resaltados fuera del texto original].

Esa ausencia total de discernimiento expositivo de la Fiscalía General de la Nación sobre el cumplimiento de los fines constitucionales para proferir la medida de aseguramiento en contra del señor Cristian Ramírez Pontón, y luego su evidente omisión en la Sentencia administrativa para denegarle las pretensiones de responsabilidad deprecadas en la demanda constituyen de manera innegable un error procedimental grave y trascendente que influyó de manera cierta y directa tanto en el fondo de la decisión penal y ahora la administrativa, no imputable directa ni indirectamente a quien alega la

vulneración del debido proceso, transgrediendo sus derechos fundamentales<sup>4</sup> al debido proceso y a obtener debida reparación que en acápite separado se detallarán.

De esta manera, la Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto Sáchica Méndez; Sentencia que fuera debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020, incurre en una manifiesta vía de hecho por **defecto procedimental absoluto** en cuanto desconoce de manera flagrante los contenidos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del artículo 28 de nuestra Constitución Política en cuanto la detención no se ordenó con todas las formalidades legales prevalentes especificadas en el inciso segundo del artículo tercero y el artículo 355 de la Ley 600 de 2000 sobre los fines constitucionales de la medida de aseguramiento; sin que en las Resoluciones interlocutorias proferidas por los delegados de la Fiscalía General de la Nación haya siquiera un mínimo “*pronóstico racional, proporcional y, especialmente, motivado, si, en el caso concreto, la detención es o no eficaz*”; cuando precisamente en la demanda, para no extenderme en la transcripción del alegato de conclusión donde se recabó el asunto jurídico, se planteó este tema como problema jurídico para el estudio, en los términos de:

Desde esta perspectiva resultaba insalvable que para resolver la situación jurídica de los imputados, la fiscalía especializada debía discernir probatoriamente sobre la urgencia de decretar la detención preventiva por ser ella necesaria para asegurar la comparecencia al proceso de los encartados, o necesaria para la preservación de la prueba, o necesaria para la protección de la comunidad, todo ello en los términos que establece el inciso segundo del artículo 3 del Código de Procedimiento Penal<sup>5</sup>; discernimiento probatorio y expositivo que se acrecentaba porque este mandamiento es nada menos que una norma rectora obligatoria y prevalente sobre cualquiera otra disposición del Código, que además debía ser utilizada como fundamento de interpretación [Artículo 24 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal].

Pero no se trataba solamente de esta norma procesal. En efecto, el legislador en el artículo 355 de la codificación procesal penal fue enfático al establecer que la medida de aseguramiento es procedente para “*garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena*

---

<sup>4</sup> **CORTE CONSTITUCIONAL.** Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.

<sup>5</sup> “La detención preventiva, en los términos regulados en este código, estará sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad”.



*privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”.*

Significaba lo anterior que el funcionario judicial al momento de valorar la procedencia de la medida de aseguramiento debía superar el simple análisis de los elementos probatorios y sustanciales exigidos por los artículos 356 y 357 del C.P.P., para revisar y definir si la imposición de la privación de la libertad se hacía imperiosa o necesaria porque el proceso permitía inferir siquiera razonablemente que los procesados no tenían arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, el asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, lo que podía explicar una facilidad para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto sustrayéndose al deber de comparecencia procesal. O que la privación de la libertad también se hacía necesaria porque existían motivos graves y fundados para inferir que los procesados podían destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o inducir a testigos, peritos o terceros para que informaran falsamente o se comportara de manera desleal o reticente; o que fueran a impedir o dificultar la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios, imponiéndose así la medida para preservar la prueba. O que estos fueran a continuar la actividad delictiva poniendo en peligro a la comunidad, porque tenían vínculos con organizaciones criminales, o se les imputaban varios delitos, o estaban sujetos a otra medida de aseguramiento, o disfrutaban de un mecanismo sustitutivo de la detención que no honraban con su comportamiento, o porque ya tenían sentencias condenatorias en su contra.

### **3.2. Segundo cargo.**

Ni la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados de primera y segunda instancia, ni el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, tuvieron en cuenta que para dictar medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad de una persona, en este caso al señor Cristian Ramírez Pontón, era necesaria la existencia de por lo menos dos indicios de responsabilidad **calificados como graves**, exigidos por la Constitución y la ley procedimental penal. La primera entidad para privar de la libertad al señor Cristian Ramírez Pontón; y la segunda para determinar la injusticia de dicha medida, el daño antijurídico causado por la omisión de la autoridad y la reparación de los perjuicios atinentes.

### **Demostración del cargo.**

El artículo 356 de la Ley 600 de 2000, establece que la medida restrictiva de la libertad “**Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso**”. Discurramos ahora sobre el calificativo de indicio **grave** que ya no es una simple probabilidad de actuación o de mera participación física, sino demostración de conducta objetiva que ocasione lesión o peligro de daño, lo

que es cosa apenas entendible en un sistema penal donde ha quedado proscrita toda forma de responsabilidad objetiva -artículo 12 del Código Penal-. Para aclarar el concepto citemos al autor Yesid Reyes Alvarado, para quien

Los indicios de responsabilidad ya no tienen que ver solamente con la simple probabilidad de actuar ni con la mera participación física en hechos jurídicamente relevantes sino que suponen la actuación que intencional o descuidadamente genera un hecho reprochable jurídicamente; para que se construya un indicio de responsabilidad debe **el hecho indicado mostrarnos no cualquier comportamiento que haya formado parte de los hechos investigados** (como ocurre en los indicios de participación) sino una conducta que desde el punto de vista objetivo y subjetivo haya ocasionado la lesión o puesta en peligro de un bien jurídicamente tutelado<sup>6</sup>.

Desde esta óptica, más conforme con los criterios criminológicos modernos, se hace necesario volver sobre la definición que de indicios graves sustentaron dos autores de reconocida altura jurídica en nuestro ámbito nacional. Para Benjamín Iragorri Diez **“Un indicio puede considerarse como grave cuando tiene aptitud bastante para integrar la certeza en la demostración del hecho punible. Debe excluir toda hipótesis en contrario”**; mientras que para Antonio Vicente Arenas en el indicio grave **“El hecho indicado se presenta en la mente como cierto”**. También la misma Corte Suprema de Justicia en sentencia 9858 de mayo 8 de 1997, con la ponencia del doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego contribuye a definir el tema con tesitura del siguiente tenor:

Se trata de una simple ponderación lógica que permite al funcionario judicial asignar el calificativo de grave o vehemente al indicio contingente cuando **el hecho indicante se perfila como la causa más probable del hecho indicado**; de leve, cuando se revela sólo como una entre varias causas probables, y podrá darle la menguada categoría de levísimo cuando deviene apenas como una causa posible del hecho indicado.

Miremos ahora, como base para la demostración del defecto fáctico, las argumentaciones que realiza la Sentencia administrativa para denegar las pretensiones de las víctimas del abuso del poder en la demanda que dio lugar al proceso de reparación directa. Dice la sentencia aquí accionada:

Bajo dicho contexto, para la Sala, en sede del análisis de responsabilidad deprecado por la demanda, se tiene que Fiscalía contó con suficientes pruebas que comprometían al señor Cristian Ramírez Pontón en la posible comisión del punible antes señalado y que cumplían el requisito de existencia de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad en su contra,

---

<sup>6</sup> **REYES ALVARADO, Yesid.** La prueba indiciaria. Ediciones Reyes Echandía Abogados Ltda. Bogotá. Segunda edición. 1989. Página 155.

establecido en las normas de procedimiento penal ya enunciadas, razón por la que el ente instructor lo vinculó a un proceso penal y posteriormente lo privó de la libertad.

(...)

Adicional a lo anterior, el ente instructor expuso en la resolución de acusación sus argumentos de manera razonada, lógica y coherente, sin que se observe que haya proferido esa decisión de forma arbitraria o sin sustento jurídico, sino en atención a las conclusiones que arrojó la valoración y análisis que le hizo a los medios probatorios con los que contaba en dicho momento procesal, de cara a la conducta que se investigaba, en la que una serie de factores de prueba y de contexto, concurrían a estimar razonadamente la posible intervención del aquí demandante en el ilícito investigado.

Por supuesto que tales afirmaciones de la sentencia administrativa nos llevan a establecer que ellas son mera síntesis concordante con las equívocas como injustas decisiones privativas de la libertad tomadas por los delegados de la Fiscalía General de la Nación. Dicho de otro modo, si bien catalogables ambigüamente como “factores de prueba y de contexto” que es diferente a lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman como indicio, no tenían ni tienen la calidad plural de estos con el calificativo legal de graves que como formalidades legales es lo que exigen tanto las normas internacionales, nuestra Constitución Política como las normas del Código de Procedimiento Penal. Discurramos en el análisis:

Por su parte, el artículo 356 ibidem sostiene que la detención preventiva se impondrá cuando existan al menos 2 indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente recaudadas dentro del proceso.

En el caso objeto de Litis, la Fiscalía General de la Nación, al definir la situación jurídica del señor Ramírez Pontón, tuvo en cuenta lo siguiente: *i)* los cinco cheques girados desde la cuenta bancaria de la sociedad Improdiesel Ltda., suscritos por el sindicato, contenían las marquillas que las autoridades habían identificado como propias de este tipo de transacciones ilícitas, *ii)* los títulos valores fueron girados por sumas inferiores a \$10'000.000, ardid que evitaba la declaración de procedencia de los fondos, *(iii)* todos los cheques fueron girados a nombre de personas inexistentes y consignados en la cuenta de una persona reconocida como integrante del cartel de Cali.

Debe precisarse que esta investigación penal se adelantó en contra de 35 personas, fundada en un primer momento por los movimientos bancarios por ellas realizados que resultaron altamente coincidentes entre sí, sobre todo en lo relacionado con el valor de los giros y las marquillas que se hallaron en el anverso de estos documentos.

No se puede considerar como indicio con el exigido calificativo legal de **grave**, el que los cheques girados por el señor Cristian Ramírez Pontón de la cuenta

corriente Número 022-03238-7 que IMPORDIESEL LTDA tenía en el Banco de Occidente y que finalmente fueron a parar a un establecimiento de comercio que el señor Bernardo Martínez Romero tenía abierto, registrado y de funcionamiento legal en el medio<sup>7</sup>, porque tales documentos cambiarios ostentaban una marquilla “propias de este tipo de transacciones ilícitas”, pues como se advierte en las transcripciones que hace la misma Sentencia administrativa tales marquillas también aparecían en cheques de otros bancos<sup>8</sup> o en movimientos bancarios realizados por 35 personas más; lo que demuestra al rompe con simple experiencia que se trata de marquillas colocadas por los empleados de banco o similares para identificar el cajero que los recibe.

Tampoco se puede considerar como indicio con el calificativo legal de **grave** el comportamiento ambiguo de simple giro de títulos valores por sumas inferiores a diez millones de pesos, como lo señaló la Fiscalía General de la Nación en sus diferentes decisiones que comprometían injustamente la libertad del señor Cristian Ramírez Pontón, o lo recoge ahora la Sentencia administrativa de segunda instancia para denegar las pretensiones de la demanda por privación injusta de la libertad.

En un proceso dialéctico de apreciación de la prueba, precisemos inicialmente el concepto de indicio de las huellas materiales del delito. Pietro Ellero lo postula así: “Para la imputación personal es clásico el indicio de la posesión de las cosas que tienen relación con el delito, tales como los instrumentos con que fue cometido y los objetos dejados sobre el lugar del mismo o recogidos en él”. Y a nivel de ejemplos agrega: “Pueden citarse la posesión, mejor, la detención de armas, venenos, sustancias abortivas, narcóticos, ganzúas, documentos o grabados criminosos, vestidos robados, frutos del delito (...)” concluyendo este párrafo con oración que resaltamos así: “y aunque sea de cosas inocentes en sí

---

<sup>7</sup> La Sentencia Administrativa admite y transcribe de la Sentencia absolutoria de 27 de julio de 2010, proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali que “*el certificado CCC 12971988 expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali, En donde se indica que esta persona matriculó en el Registro Mercantil el núm34 5399-1 desde el 14 de junio de 1995 y que a su nombre y bajo el número 4042812 también se matriculó el establecimiento de comercio ‘RAPICHEQUES’ con actividad comercial expresamente como ‘cambio de cheques de bancos nacionales’*”.

<sup>8</sup> Como lo transcribe la misma Sentencia Administrativa “Del análisis de los extractos bancarios de esta cuenta, la Superintendencia Bancaria dedujo que en el primer semestre de 1998, se depositaron en esta cuenta más de mil millones de pesos y que muchos de los cheques consignados en esta cuenta, corresponden a cheques de gerencia expendidos por el BANCO COLPATRIA, advirtiendo que algunos de estos cheques presentan las cuestionadas marquillas que como se ha dicho, son típicas de actividades de lavado”.

mismas, pero que adquieren importancia por haberse encontrado en el lugar donde el delito hubiere sido cometido”<sup>9</sup>.

El autor Gustavo Peláez Vargas nos presenta este indicio de las huellas materiales del delito como “En muchas ocasiones la comisión del delito deja rastros, señales, vestigios, huellas, que en un caso dado pueden servir de medio indiciario para la identificación del delincuente; tales signos pueden quedar en las personas o en las cosas, y es imposible su enumeración, por extensa”<sup>10</sup>.

Aquí surge la necesidad de hacer una aclaración de efectos importantes desde el derecho probatorio y la estructuración de la prueba indiciaria en general. Que los cheques girados “contenían las marquillas que las autoridades habían identificado como propias de este tipo de transacciones ilícitas” es un medio de prueba específico; en tanto que los “títulos valores fueron girados por sumas inferiores a \$10'000.000” es otro medio de prueba específico pero diferente como “ardid que evitaba la declaración de procedencia de los fondos”. En tal caso, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Sentencia administrativa ahora accionada pueden afirmar que cada uno de estos elementos de prueba constituye un indicio sin incurrir en una flagrante violación del artículo 285 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal que establece la Unidad de indicio en los términos de “**El hecho indicador es indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden tomarse separadamente como indicadores**”.

Sin explayarnos en la cita de autores nacionales y extranjeros, basta con traer una opinión como la del tratadista Yesid Reyes Alvarado, quien en desarrollo del citado artículo procesal enseña que:

Aun cuando lo normal es que cuando se va a construir un indicio se demuestre el hecho indicador con base en un solo medio de prueba, existen ocasiones en las cuales convergen varios medios de prueba a la demostración de un mismo hecho indicador, como cuando a través de una confesión, dos testimonios, tres documentos y una inspección judicial se demuestra que el sindicato estuvo efectivamente en determinado lugar el día y a la hora en que los hechos ocurrieron; en estos casos de prueba múltiple del hecho indicador no debe considerarse que cada medio de prueba ha permitido demostrar un hecho indicador distinto y que en consecuencia se pueden construir distintos indicios con base en cada una de las formas de demostrar el hecho indicador; en estas hipótesis lo que realmente ocurre es que un solo hecho indicador ha sido demostrado con la ayuda de varios medios de prueba, de la misma forma como puede condenarse a una persona con ayuda de un solo medio de prueba o con el auxilio de varios sin

---

<sup>9</sup> **PIETRO, Ellero.** De la certidumbre en los juicios criminales o tratado de la prueba en materia penal. Biblioteca jurídica de autores Españoles y extranjeros. Sexta edición. Reus S.A. 1968. Página 85.

<sup>10</sup> **PELAEZ VARGAS, Gustavo.** Manual de pruebas penales. Colección jurídica Bedout. Primera edición. 1975. Página 86.

que en esta última hipótesis se pudiera señalar que como existen varias pruebas contra el sindicado se lo puede condenar varias veces<sup>11</sup>.

A los dos medios de prueba anteriores, esto es las marquillas y la cuantía de los cheques, sumaríamos otro medio de prueba que, aunque no cumple con el requisito de estar debidamente probado como lo exige también el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, es traído por la Fiscalía General de la Nación y ahora argumentado en la Sentencia administrativa de segunda instancia. Es el comportamiento o supuesto e hipotético evento que subjetivamente se hace consistir por unos y ahora por otros, en que “todos los cheques fueron girados a nombre de personas inexistentes y consignados en la cuenta de una persona reconocida como integrante del cartel de Cali” y que la sentencia penal absolutoria califica en su exacta dimensión de conjetura, pues ni siquiera el ente investigador se preocupó por establecer la certeza de tal acontecimiento. Pero sin meternos en honduras sobre el derecho probatorio, digamos apenas que se trata de otro medio de prueba en cuanto permite establecer, en consonancia con los elementos anteriores, un todo que llamamos “modus operandi”, que al decir de Valderrama Vega y Dohring Erich citados Reyes Alvarado debe entenderse como “(...) la forma habitual como determinadas personas acostumbran a desarrollar sus ilícitas actividades”<sup>12</sup>; agregando que “entre más generalizado sea el sistema empleado por una persona para cometer un delito menos grave será el indicio”.

Desde una estricta técnica del derecho probatorio, comete error grave tanto la Fiscalía General de la Nación y como ahora la Sentencia administrativa, al decir que en el caso seguido contra el señor Cristina Ramírez Pontón existían tres indicios graves para dictarle medida de aseguramiento privativa de la libertad, cuando en realidad solo se configuraba y se configura apenas el indicio de las huellas materiales del delito al cual se llega por tres fuentes, señales o comportamientos diferentes.

El autor Reyes Alvarado indica para la cabal comprensión del tema que fuera ignorado por la Fiscalía General de la Nación y ahora desconocido en la Sentencia administrativa:

Al referirse a esta forma de aplicar el principio de la unidad del hecho indicador señaló la Suprema Corte de Justicia en un caso concreto que “el hecho de conocer el procesado la clave de la caja fuerte y el tener en su poder la llave de la misma y la de todas las puertas que daban acceso a las diversas oficinas, son constitutivas de las “posibilidades materiales” para agotar los actos delictuosos en la forma en que ocurrieron”, criterio con el cual acertadamente se precisa

---

<sup>11</sup> **REYES ALVARADO, Yesid.** La Prueba Indiciaria. Ediciones “Reyes Echandía Abogados Ltda”. Segunda edición. Bogotá. 1989. Páginas 80-81.

<sup>12</sup> **IBIDEM.** Página 274

que el haber demostrado tres circunstancias distintas (conocer la clave de la caja fuerte, tener las llaves de dicha caja y poseer llaves de todas las puertas que daban acceso al lugar donde se encontraba la caja de seguridad) significaba tan solo haber demostrado varios aspectos de un mismo hecho indicador que se refería a la posibilidad u oportunidad de cometer el delito investigado [CFR: C.S. de J. Sala de Casación Penal. Casación de Febrero 19 de 1971. G.J. Tomo CXXXVIII (2340-2345), pág 447 (1) M.P. Dr Mario Alario Di Filippo].

Y precisemos ahora si ese indicio de las huellas materiales del delito, que es el único que se podía imputar al procesado, es doctrinaria o jurisprudencialmente clasificado como indicio grave. Para Peláez Vargas en obra y página ya citada, “Naturalmente que estos indicios no son suficientes por sí solos para la demostración del autor, pero si pueden llegar a serlo en concurso con otros indicios”. Y conforme al autor “Queremos decir que si en verdad en muchos casos esa tenencia del cuerpo del delito o su relación con el mismo es signo probable de responsabilidad, también es importante estar en guardia contra las insidias que este indicio implica” O “En ninguno de los casos dados como ejemplos la tenencia del cuerpo del delito es indicante de responsabilidad del ilícito que se investiga. La precaución más importante radica en admitir que se puede en muchas ocasiones portar tales objetos y no obstante estar el sindicado desvinculado de la acción delictiva. También es justo reconocer que en muchos casos por múltiples razones una persona inocente no pueda explicarse ni justificarse por esta tenencia”<sup>13</sup>.

Aún en el caso que ello fuera considerado indicio **grave**, que no lo es como se ha comprobado, éste no era ni es suficiente desde la formalidad legal que impone la Constitución y las normas del procedimiento penal, para dictar la medida de aseguramiento de privación de la libertad.

Que no era ni es un indicio grave bien se deduce de la prueba documental que oportunamente aportara la defensa, que la Fiscalía caprichosamente desconoció con argumentaciones ilógicas y que la Sentencia administrativa ahora accionada recoge para tenerlas como fundamentos implícitos propios así:

*Respecto de estos títulos valores la defensa aporta la copia de los comprobantes de egreso número 11541, 11542, 11540, 11544 y 11620 con sus respectivos soportes, esto es, orden de compra y remisión de repuestos.*

*Al hacer un detenido análisis de tales documentos, especialmente de los comprobantes de egreso, se observan las siguientes características:*

*Al final de cada uno de las órdenes de remisión del proveedor, en este caso de IMPORPARTES, aparece una nota que: ‘dice favor girar cheque cruzado a nombre de Jaime Jiménez’ para el primero de los comprobantes, ‘favor girar cheque cruzado a nombre de Eduardo Murillo’ para el segundo de ellos; ‘favor girar cheque cruzado a nombre de Carlos Estrada’ para el tercero, ‘favor*

---

<sup>13</sup> **ARENAS SALAZAR, Jorge.** Crítica del indicio en materia penal. Editorial Temis S.A. Bogotá. 1988. Páginas 101 y 103.

*girar cheque cruzado a nombre de Gustavo Rodríguez' para el cuarto, y, el último que fue girado a nombre de Adolfo Castro, pago es de soportado con un pagaré.*

Argumentaciones ilógicas de los delegados de la Fiscalía General de la Nación, porque impusieron su criterio personal o subjetivo sobre lo que indica la experiencia, que tampoco es contraria a la ley comercial. Acaso quien realiza un negocio no puede autorizar a un tercero para que reciba el pago en dinero o en cheques a su nombre? Y debe responder el girador del cheque por la autenticidad del pedido, sugerencia o solicitud que le hace el beneficiario del cheque? La jurisdicción no puede olvidar clásicas jurisprudencias de nuestra Corte Suprema de Justicia y que así constituyen una regla para la sana crítica de la prueba indiciaria. Hacemos referencia a las sentencias de casación del 3 de agosto de 1945, LIX, 490; 15 de septiembre de 1950, LXVIII, 207; 9 de octubre de 1962, C, 401, entre otras, donde postuló:

El indicio es un hecho que por su sola objetividad lleva la posibilidad de imputación inculpativa. Y no será indicio que prueba responsabilidad el que necesita, para valer como tal, de la apreciación subjetiva del Juzgador, porque en tal caso todas las contingencias y sucesos allegados a la vida de un proceso estarían sometidos, sin lógica ni sana exégesis legal, al arbitrio de las diferentísimas subjetividades de los varios juzgadores del proceso. El hecho que se toma como indicio inculpativo por la sola interpretación subjetiva del juzgador, no es un indicio sino una sospecha.

Mírese la argumentación pertinente para concluir que el fallador reemplaza la objetividad, la experiencia, las reglas de la sana crítica por sus concepciones, la manera como él particularmente se comportaría y que la psicología cataloga bajo el criterio de auto-observación analógica, que así le son propias y caprichosas:

*Al respecto habremos de precisar que si en realidad se trató de un negocio comercial, en el que se cotizaron a través de las órdenes de remisión los repuestos que se detallan en el soporte del comprobante el negocio se realizó entre IMPRODIESEL e IMPORPARTES, este último en calidad de proveedor, quien realmente debió ser el beneficiario de los pagos y no así las terceras personas por las que se solicitaba girar, pues estas no tenían relación alguna con la actividad comercial de aquella.*

*No es posible admitir que un negocio tan específico como el de compra de repuestos en que el proveedor entrega su pedido y la empresa paga por ello, donde la única relación contractual existente es proveedor – empresa, se utilicen este tipo de condiciones o sugerencias, menos aún cuando se solicita que los pagos se realicen a nombre de personas totalmente desconocidas y ajenas a la razón social tanto de la empresa como del proveedor. Cuál es la razón para no tirar el cheque a nombre de importarte si ese era el real beneficiario?*



No es este el campo para extenderme en análisis que fueron oportunamente realizados para impugnar o mostrar las equivocaciones de las instancias pertinentes de la Fiscalía, o que ya se dejaron igualmente puntualizados en la demanda con que se inició el juicio de reparación directa y que constan en las copias allegadas a éste proceso. Me basta con adverar que el artículo 238 sobre apreciación de las pruebas contenido en la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación y que tanto allá como aquí se desconoce, impone que “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”; sana crítica de la cual hacen parte –entre otras- las normas de la lógica y las máximas de la experiencia formadas a través de los siglos, el sentido común, la sagacidad, la inteligencia, la dialéctica, la psicología experimental, la doctrina, la jurisprudencia, según precisión académica del autor Antonio Rocha Alvira<sup>14</sup>.

Pero si contrariando toda la doctrina y la jurisprudencia, en un alcance innovador le atribuimos al indicio de las huellas materiales del delito el carácter de indicio grave, la privación de la libertad del señor Cristian Ramírez Pontón no solo vulneraría el inciso segundo del artículo 356 del Código de Procedimiento en cuanto exige no uno sino dos indicios graves de responsabilidad, sino que estamos frente a una medida “injusta”, término que en las voces de la Sentencia C-037 de 1996 que analizó la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se refiere “a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”.

En consecuencia, el que la Fiscalía General de la Nación en sus resoluciones de detención haya obviado estas imposiciones legales, y que luego la sentencia administrativa pregone para dichas decisiones que son fiel seguimiento de los condicionamientos que la ley impuso a la Fiscalía en materia de detención, o que responden al “resultado del análisis de los requisitos que el estatuto procesal y sustantivo penal vigente para esa época exigían” configuran el defecto fáctico que se da cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión<sup>15</sup>, **defecto fáctico en dimensión negativa** que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da

---

<sup>14</sup> **ROCHA ALVIRA ANTONIO**. (1968). De la prueba en derecho. Ediciones Lerner. Quinta edición Bogotá.

<sup>15</sup> **CFR**: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.

por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.

Precisamente al desconocer estas orientaciones doctrinarias y jurisprudenciales, sin que además se den las razones para que tales indicios ahora y aquí si puedan ser tenidos como **graves**, lo que de suyo vendría a constituir una novedosa revaluación de “*las máximas de experiencia formadas a través de los siglos*” según afirmación didáctica de Antonio Rocha Alvira, además de incurrirse en un grave defecto fáctico en la dimensión negativa como se viene argumentando por el accionante, dolorosamente se incurre en un acto censurable de revictimización hacia el señor Cristian Ramírez Pontón y su familia.

Lo anterior porque el juez de conocimiento de la acción penal, con autoridad profesional especializada y jurisdiccional para evaluar las distintas situaciones procesales, hizo consideraciones precisas en su fallo de absolución [CFR: Anexo cuatro] que la Sentencia administrativa a pesar de transcribir ahora prefiere ignorar, incurriendo nuevamente en el defecto fáctico en dimensión negativa; consideraciones donde el Juzgado Especializado no solo dejó dicho que “El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, a través de providencia del 16 de marzo de 2009, al desatar la solicitud formulada por el acusado, revocó la de detención domiciliaria y, como consecuencia ordenó su libertad inmediata. Consideró que los fines de la medida de aseguramiento no se cumplían, por cuanto los procesados no representaban un peligro para la sociedad y se carecía de prueba que dilucidara alguna intervención indebida en el proceso”, sino que también señaló:

*Continuando con la valoración de cada uno de los casos, nos encontramos frente a la situación particular de los señores Javier Alonso del divino niño de Jesús y Cristian Ramírez Pontón, y efectuándose un examen detallado no solamente del material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación, sino conocida la sindicación debemos resaltar que nuevamente Estas personas han sido investigadas por el simple de ser giradores de unos cheques que por razón de actos de sus beneficiarios fueron a parar a manos de un lavador de activos; caso en el cual como lo hemos venido reiterando los giradores no tendría ninguna responsabilidad penal por dicha acción.*[Subrayas en el texto original].

Agregando luego:

*Evidenciándose entonces qué los cheques girados por los señores Cristian Ramírez Pontón y Javier Alfonso del Divino Niño Jesús tenían el sello del cruzado resultando evidente que sólo podían cobrarse por conducto de una entidad financiera cómo lo establece la norma del Código de Comercio, Aconteciendo que si los beneficiarios carecían de cuentas corrientes o de ahorros teniendo la necesidad inmediata de efectivo no resulta nada extraño o sospechoso que hubieran acudido a cambiarlos por dinero en efectivo a un establecimiento de Comercio abierto para la atención general del público, que funcionaba en pleno centro de la ciudad de Cali, firma registrada ante la Cámara de Comercio de esta ciudad aconteciendo que su propietario el señor*

*Martínez Romero era un comerciante reconocido que para esa época no presentaba ningún cuestionamiento penal.*

*Tan evidente fue el error de la Fiscalía que optó por el camino más fácil, vinculando, dictando pliego de cargos y lo que es peor solicitar fallo de condena a los representantes de IMPRODIESEL, señores Cristian Ramírez Pontón y Javier Alfonso del Divino Niño Jesús por el solo hecho objetivo de haber girado los títulos valores anteriormente señalados, resultando imposible imputarle responsabilidad penal por el comportamiento del lavado de activos, no pudiéndose olvidar que la posición jurídica de las partes y los derechos que se transfieren en la serie de relaciones cambiarias generadas por el proceso de circulación de un título valor son independientes entre sí.*

Pero también el Juzgado Especializado hizo una crítica plausible y además de simple lógica a la actuación negligente de la Fiscalía General de la Nación:

*(...) determinándose que estos últimos valores fueron emitidos por los señores Javier Alonso del Divino Niño Jesús y Cristian Ramírez Pontón, razón de negociaciones celebradas como socio de la firma IMPORTARTES LTDA., Empresa cuya existencia real se acreditó con el correspondiente certificado de Constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio de Cali, explicándole los motivos y las razones por las cuáles se giraron los cheques con los cuales se cancelaron Obligaciones a nombre de los señores Jaime Jiménez Eduardo Murillo Carlos Estrada Adolfo Castro y Gustavo Rodríguez, **resultando necesario que los beneficiarios de los cheques debieran ser citados por la Fiscalía General de la Nación** explicare el por qué estos títulos valores fueron a parar a las cuentas del señor Bernardo Martínez Romero y en condiciones de endoso diferentes a las que originalmente previsibles y previstas por sus giradores [Lo resaltado fuera del texto original].*

Si la sentencia absolutoria del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali dejó claro con la potestad jurisdiccional y el conocimiento particular de la ciencia penal la valoración probatoria del asunto, criticando fuertemente las equivocaciones que en materia indiciaria incurrió la Fiscalía General de la Nación. Y si dicha sentencia sin apelación de la Fiscalía o del Ministerio Público hizo tránsito a cosa juzgada, no le es permitido ni válido al juzgador administrativo desconocer, reemplazar o suplantar las valoraciones que hizo el juzgador penal. Su función es establecer de manera puntual si la Fiscalía dio estricto cumplimiento a las formalidades legales establecidas en la Constitución y la Ley procedimental penal para dictar la privación de la libertad. Desconocer, reemplazar o suplantar esas valoraciones es incurrir no solo en otro **defecto fáctico**, sino en una violación a los principios universales del derecho que nuestra Constitución Política acoge en su artículo 29 en los términos de “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”-, pasando de esta manera a revictimizar a la familia Ramírez Hincapié.

De esta manera, la Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto SÁCHICA Méndez; Sentencia que fuera debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020, incurre en una manifiesta vía de hecho por **defecto fáctico en la dimensión negativa** por cuanto desconoce de manera flagrante los contenidos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del artículo 28 de nuestra Constitución Política en cuanto la detención no se ordenó con todas las formalidades legales prevalentes especificadas en los artículos tercero y sexto sobre libertad y legalidad de la Ley 600 de 2000; en concordancia con los artículos 356 sobre requisitos para dictar la medida de aseguramiento, 238 sobre apreciación de la prueba, artículo, artículo 284 sobre el carácter de la prueba indiciaria y 287 sobre apreciación de la misma, estos de la Ley 600 de 2000, con la doctrina y la jurisprudencia penal concerniente que las explican y definen. Además se vulnera la garantía procesal considerada en la normativa internacional y constitucional de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho contenida en los artículos 29 de la Constitución, 19 de la Ley 600 de 2000 sobre Cosa Juzgada y 12 de la misma ley sobre Autonomía e independencia judicial el cual establece que “Las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso penal serán la expresión del ejercicio de la función constitucional de administrar justicia”. Además se vulnera el derecho al respeto de la dignidad humana consagrado en el artículo primero de la Constitución, con el consiguiente artículo primero de la Ley 600 de 2000.

El equívoco y la injusticia en la determinación de qué debe entenderse como indicio grave en que incurrieron los delegados de la Fiscalía General de la Nación como requisito para imponer la medida de aseguramiento en contra del señor Cristian Ramírez Pontón, y luego su evidente omisión en la Sentencia administrativa para denegarle las pretensiones de responsabilidad deprecadas en la demanda, constituyen de manera innegable un error procedimental grave y trascendente que influyó de manera cierta y directa tanto en el fondo de la decisión penal y ahora la administrativa, no imputable directa ni indirectamente a quien alega la vulneración del debido proceso, transgrediendo sus derechos fundamentales<sup>16</sup> al debido proceso y a obtener debida reparación que en acápite separado se detallarán.

---

<sup>16</sup> **CORTE CONSTITUCIONAL.** Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.

### 3.3. Tercer cargo.

Para la Sentencia administrativa materia de esta acción de tutela, el contexto fáctico del proceso no le permite aplicar un régimen de responsabilidad objetivo, aconteciendo que tampoco la actividad de la Fiscalía General de la Nación le permite pregonar una falla en el servicio; dando lugar así a una vía de hecho por **defecto procedimental absoluto**. Bueno es transcribir el párrafo atinente:

De acuerdo con lo anterior, el llamado de la entidad pública recurrente para que el proveído apelado sea revocado, será atendido, en tanto para la Sala el contexto fáctico del proceso, las actuaciones de las autoridades que participaron, y el fiel seguimiento de los condicionamientos que la ley impuso a la Fiscalía en materia de detención del señor Ramírez Pontón, no permiten apoyar la definición de la responsabilidad deprecada en la demanda, en un régimen de responsabilidad objetivo, al lado de lo cual, analizada la conducta de la pasiva, tampoco se encuentra una falla en el servicio capaz de activar un mecanismo resarcitorio. Así, no procediendo definir la responsabilidad endilgada bajo el título de imputación objetivo empleado por el Tribunal de primera instancia, y acreditado que la privación del señor Cristian Ramírez Pontón no fue injusta, se revocará la sentencia impugnada, ante la ausencia de prueba efectiva de una falla del servicio de la demandada, todo de conformidad con las circunstancias que precedieron la imposición de la medida de aseguramiento proferida en su contra; así, en consecuencia, se denegarán la totalidad de las pretensiones de la demanda.

No se trata aquí de una reparación automática de perjuicios, sino de la obligación que se tiene de discurrir si la privación de la libertad fue apropiada, razonada y conforme a derecho y no abiertamente arbitraria, como lo impone la Corte Constitucional en su sentencia C-037 de 1996<sup>17</sup> mediante la cual analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, postulando -según cita de la misma sentencia accionada- que:

*Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención".*

---

<sup>17</sup> M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Acogiendo los criterios de esta jurisprudencia constitucional, en el artículo 295 de la Ley 906 de 2004 o Sistema penal acusatorio se estableció la **Afirmación de la Libertad** en los términos de “Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o la restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales”.

Téngase en cuenta ahora que la medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso en contra el señor Cristian Ramírez Pontón, fue proferida por la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá mediante Resolución del 18 de mayo de 2006, al considerarlo responsable del delito de lavado de activos. Así mismo que a través de providencia del cuatro de agosto de 2006 desatando la solicitud de revocatoria de detención domiciliaria formulada por el señor Ramírez Pontón, la Fiscalía General de la Nación mantuvo la medida de aseguramiento. Así las cosas, aunque el proceso por lavado de activos se regía por el sistema procesal escriturario de la Ley 600 de 2000, esta norma sobre Afirmación de la Libertad estaba vigente al momento que se resolvió la situación jurídica del señor Cristian Ramírez Pontón y resultaba aplicable al caso por ministerio del inciso segundo del Principio rector contenido en el artículo sexto de esta Ley que en lo pertinente dispone y manda: “La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”; norma rectora que por mandato del artículo 24 del mismo Código de Procedimiento Penal es obligatoria, prevalente y fundamento de interpretación.

Desde esta perspectiva legal lo que debe establecerse esencialmente es si las decisiones sobre privación de la libertad del señor Cristian Ramírez Pontón adoptadas en doble instancia por la Fiscalía General de la Nación responden o contienen, o por el contrario carecen ostensiblemente de un pronóstico de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad para su aplicación frente a los contenidos constitucionales; pronóstico que debe ser **especialmente motivado** sobre si en el caso concreto la detención es o no eficaz en los términos que señalan las jurisprudencias citadas sobre los Fines constitucionales para la medida; esta vez específicamente la contenida en Auto de febrero 19 de 2002, radicación 18592, de la cual fuera ponente el doctor Jorge Enrique Córdoba Poveda, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal y que transcribimos así:

Quiso el garante de la supremacía de la Constitución Política que el juez, acorde con los nuevos postulados legales, no solamente verifique el cumplimiento de los factores objetivos de que trata

cada uno de los tres ordinales del artículo 357 del C. de P.P. (monto de la pena, cualificación de algunos comportamientos y vigencia de sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional), **sino que establezca, bajo un pronóstico racional, proporcional y, especialmente, motivado, si, en el caso concreto, la detención es o no eficaz**, por lo que si concluye que el procesado comparecerá en cualquier tiempo al proceso, bien sea para la instrucción, el juzgamiento o la ejecución de la pena, preservará la prueba, es decir, no ocultará, destruirá o deformará elementos relevantes para el proceso ni entorpecerá su aducción, y que no colocará en peligro a la comunidad, o sea, no incurrirá nuevamente en actividades delictivas, deberá abstenerse de imponerla o revocar la existente. [Lo resaltado fuera del texto original].

Es decir, que una medida de aseguramiento de privación de la libertad sin el cumplimiento de todas las **formalidades legales** como lo manda el artículo 28 de nuestra Constitución Política y su Bloque de Constitucionalidad, esto es los requisitos del inciso segundo del artículo 356 de la Ley 600 de 2000 y el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento del inciso segundo del artículo tercero en consonancia con el artículo 355 de la misma Ley, esto es sin la “*observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio*” en los términos del artículo 29 de la misma Constitución, es en sí misma una privación de la libertad desproporcionada, irrazonable o arbitraria que no necesita comprobaciones adicionales, menos aún cuando la misma Sentencia administrativa de segunda instancia y materia de esta acción constitucional advierte que “Lo cierto es que dicha decisión no obedeció a la existencia de una irregularidad o arbitrariedad de la Fiscalía al imponerle la medida de aseguramiento, al confirmarla y al acusarlo, **sino que se dio al no existir certeza sobre su participación en el punible investigado**” [Lo resaltado fuera del texto original]

Pasa por alto la Sentencia administrativa que cualquier vulneración en que incurra el Estado contra el principio constitucional de la libertad es uno de los eventos en los cuales la exigencia de la justicia material es totalmente concordante con la justicia formal, pues se encuentra decantado en la ley, la jurisprudencia y la doctrina que toda agresión al bien supremo de la libertad es “**desproporcionada, irrazonable y arbitraria**”, sin que exista tarifa legal que pueda medirle, mucho más cuando en una investigación penal se profiere detención que se traduce en años, sin encontrarse probados los requisitos que configuran la excepción a la regla de derecho internacional que exige investigar en libertad. Excepción que en nuestro ordenamiento tiene causales taxativas respecto de las calidades del sindicado del cual debe predicarse necesariamente la Finalidad constitucionalidad de la medida de privación de la libertad y no solo la existencia del requisito de los indicios calificados legalmente como **graves** de responsabilidad que, como se ha demostrado, la sentencia del Consejo de Estado omitió verificar o contemplar (...) “dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las

circunstancias en que se ha producido la detención”, lo que en lenguaje de la Sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional se precisa como “el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”.

De esta manera, la Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto Sáchica Méndez; Sentencia que fuera debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020, incurre en una manifiesta vía de hecho por **defecto procedimental absoluto** cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido<sup>18</sup>; que se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia desvía el cauce del asunto y porque “(...) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”<sup>19</sup>.

Estamos, entonces, frente a un error procedimental grave y trascendente que influye de manera cierta y directa con el fondo de una decisión que dispone no solamente revocar la sentencia de condena proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 19 de agosto de 2014 para así denegar las pretensiones de la demanda y condenar a “la parte actora a pagar, como agencias en derecho, la suma de 3 SMLM, además de las costas que se hubieren causado en la primera instancia”; deficiencia que no puede imputarse directa ni indirectamente a los aquí accionantes y que a consecuencia de lo anterior se vulneran derechos fundamentales de las víctimas del poder como el derecho al debido proceso, el derecho a obtener reparación y el derecho a la dignidad cuyo contenido se exhibirá en el acápite siguiente.

### 3.4. Cuarto cargo.

---

<sup>18</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.

<sup>19</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-620 de 2013.



En el extremo de la revictimización, la Sentencia administrativa aquí accionada, finalmente dispone condenar en costas y agencias en derecho a las víctimas del abuso del poder, específicamente al señor Cristian Ramírez Pontón, señalando así:

De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, el artículo 365 del Código General del Proceso en el numeral 4 dispone que se condenará en costas a quien resulte vencido en aquellos casos en que la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior<sup>20</sup>.

Se impondrá la condena en costas pertinente de segunda instancia, en cuanto el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en contra del fallo del *a quo* fue resuelto de manera desfavorable.

Así, el artículo 361 *ejusdem* prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 5 del Acuerdo No. 1887 de 2003<sup>106</sup>.

En cuanto a las costas y agencias en derecho de la segunda instancia, ha de tenerse en cuenta que se revocará en su integridad el fallo apelado, por lo que la parte actora será condenada al pago de aquellas. El Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, en atención a las reglas aplicables a la materia, debiendo considerar que en esta instancia, de cara a la participación activa de la entidad demandada y su apoderado, se impone a título de agencias en derecho, la suma de 3 SMLM.

Ante esta definición, se impone su liquidación de manera concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

En este orden, la Sentencia administrativa de que trata esta acción de tutela funda su decisión de costas y agencias en derecho en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por sus siglas CPACA; norma que para su aplicación manda acudir a las normas atinentes del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, dicha sentencia acude al artículo 365 del Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012 que por mandamiento del numeral sexto del artículo 627 entró en vigencia a partir del primero de enero de 2014, esto es un año y cuarenta y cinco días después de la fecha en que se interpuso la demanda de reparación directa que lo fue el día 15 de noviembre de 2012, como lo indica la sentencia ahora tutelada.

---

<sup>20</sup> “105 artículo 365 C.G.P.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.”(...) (subrayas de la Sala).

En tal caso, y por mandamiento expreso del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en materia de costas la norma aplicable era el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil el cual impone sin subterfugios de interpretación que “la condena se impondrá cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal o cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad” condiciones que la Sentencia administrativa aludida no especifica para el caso concreto.

Es curioso, por decir lo menos, que cuando se niega la aplicación de una teoría objetiva para decretar la indemnización de daños y perjuicios por privación injusta de la libertad, en el análisis de las formalidades legales para la medida de aseguramiento en materia penal sí se hace uso de la proscrita responsabilidad objetiva a pesar de lo establecido en el artículo 12 del Código Penal en el sentido de “Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”; para finalizar con una condena en costas objetiva porque no mira tampoco condiciones impuestas por el Código de Procedimiento Civil como manifiesta carencia de fundamento legal o la subjetiva de “a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad”; eventos reconocidos por el mismo Consejo de Estado en su Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, para citar apenas un ejemplo, cuando en fallo del 14 de diciembre de 2018 en proceso con radicación 76001-23-31-000-2010-01121-01(60232) se postuló que “Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe”.

De esta manera la Sentencia administrativa o bien incurre en un *defecto procedimental absoluto* al ceñirse a un trámite completamente ajeno al pertinente, o mejor a un **defecto fáctico** cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

## 4

### Derechos fundamentales vulnerados

---

La citada Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto Sáchica Méndez; Sentencia

que fuera debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020 vulnera derechos fundamentales de las víctimas del poder o accionantes Cristian Ramírez Pontón y sus familiares, los cuales se explican así:

(i) **Debido proceso.** La doctrina lo define "... como todo conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho"; agregándose que: "El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las demás funciones del Estado, la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan positiva y negativamente a los servidores públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y únicamente pueden actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia"<sup>21</sup>. Esta jurisprudencia también señala que el derecho al debido proceso comprende los siguientes derechos:

a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces, a obtener de la rama judicial del poder público decisiones motivadas, a impugnar las decisiones judiciales ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo [Lo resaltado fuera del texto original].

(...)

f) El derecho a la imparcialidad del juez, funcionario que siempre deberá decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas [Lo resaltado fuera del texto original].

Este derecho es de aplicación inmediata conforme a lo dispuesto por el artículo 85 de la Carta, vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal que pretende dentro de sus fines proteger a los individuos en su dignidad, personalidad y desarrollo frente a eventuales arbitrariedades amparadas en el ejercicio del poder.

Dichas así las cosas, "Por debido proceso debe entenderse el conjunto de principios y reglas de procedimiento preestablecidas en los pactos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en la ley, que la autoridad competente debe observar plenamente en la actuación legislativa, judicial o administrativa, con el fin de garantizar efectivamente los derechos de la persona reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos con efectos jurídicos vinculantes"<sup>22</sup>. Y siguiendo los trazos de la

---

<sup>21</sup> **CORTE CONSTITUCIONAL.** Sentencia T-001, enero 12 de 1993. Magistrado ponente Jaime Sanín Greiffenstein.

<sup>22</sup> **DEFENSORIA DEL PUEBLO.** Recurso Extraordinario de Casación Penal. Manual para defensores públicos. Bogotá. Junio de 2012.

jurisprudencia constitucional reseñada, “Es debido aquél proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material”.

Si por debido proceso debe entenderse el conjunto de principios y reglas de procedimiento preestablecidas en los pactos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en la ley, es evidente que la privación de la libertad del señor Cristian Ramírez Pontón decretada por la Fiscalía Décima Especializada pasó por encima de los contenidos de los artículos 355 nada menos que sobre los **Fines constitucionales** para la medida de aseguramiento; pero además infringió palmariamente los artículos 286 y 356 inciso segundo, de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, además de los que ya se dejaron anotados en cada uno de los cargos y su demostración; todo lo cual comporta una violación de la Constitución Política en cuanto concierne a las **Formalidades legales** -artículo 28- y la **Observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio** -artículo 29-. Pero a su vez la Sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, incurre en similar violación del debido proceso al afirmar con desconocimiento absoluto de estas normas procedimentales y constitucionales que “(...) las decisiones y medidas proferidas por la Fiscalía General de la Nación en contra del demandante” no fueron injustas **“sino bien por el contrario, el resultado del análisis de los requisitos que el estatuto procesal y sustantivo penal vigente para esa época exigían; o fueron “el fiel seguimiento de los condicionamientos que la ley impuso a la Fiscalía en materia de detención” del señor Ramírez Pontón”,** que por lo tanto “no permiten apoyar la definición de la responsabilidad deprecada en la demanda (...)” [Los resaltados fuera del texto original]

Tales las razones para pregonar con suficiencia que esta Sentencia Administrativa de segunda instancia vulnera el debido proceso de los accionantes pues su “fundamentación no es conforme a derecho” y, por tanto, no estuvo “sujeta al imperio de lo jurídico”; artículos constitucionales y procedimentales “que la autoridad competente deb[ió] observar plenamente en la actuación (...) judicial” “con el fin de garantizar efectivamente los derechos de la persona reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos con efectos jurídicos vinculantes”; **debido proceso que** “no solamente pretende que el servidor público cumpla las funciones asignadas, sino que además lo haga en la forma que lo determina el ordenamiento jurídico” como lo dejó señalado la Corte Constitucional en su Sentencia T-521 de septiembre 19 de 1992 con la ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero. O, “el actor tenía derecho a ser oído, y a que sus peticiones fueran atendidas con sujeción al ordenamiento jurídico” en expresiones de la Sentencia T-461.931 de ocho de agosto de 2002 de la cual fuera ponente el Magistrado Álvaro Tafur Galvis.

(ii) **Derecho a obtener reparación**, como derecho consagrado en el artículo 9 numeral 5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en los términos de “**Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación**”, Pacto que no solo hace parte de nuestro Bloque de Constitucionalidad, sino que también entró en vigor para Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968. Los alcances que se proponen para este derecho deben ser comprendidos desde los *Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder*<sup>23</sup>, donde conforme al Principio 18

Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos<sup>24</sup>.

Debe acotarse que por una indebida consagración del artículo 70 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Justicia, en el sentido que de las acciones de reparación directa por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, “conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario” la costumbre judicial ha puesto en las carátulas de los expedientes la categoría de “demandantes”, cuando el Bloque de constitucionalidad señala que se trata de *víctimas del poder*; proceso que además vulnera el Principio cinco en cuanto señala que debe tratarse de “procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles”.

Este derecho está contenido en el *Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad* el cual hace parte de nuestro Bloque de Constitucionalidad; específicamente en el Principio general número 36 sobre *Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar* que se expresa así: “*Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor*”. Empero, este Principio también está expresamente consignado en el artículo 90 de nuestra Constitución política:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

---

<sup>23</sup> Adoptados por la Asamblea General en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.

<sup>24</sup> Como por ejemplo el derecho a la Libertad.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Por ello nuestra Corte Constitucional ha sentado importantes precedentes que deben tenerse en cuenta en relación con este derecho. Así, en sentencia de constitucionalidad C-775 de septiembre nueve de 2003 con la ponencia del doctor Jaime Araújo Rentería, sin ambages de interpretación se puntualizó:

**Derechos fundamentales de las víctimas.** “Cuando quiera que la consecución de la protección y eficacia de los derechos fundamentales se ven obstaculizadas con la comisión de conductas punibles, las autoridades estatales, en particular las judiciales, en cumplimiento de sus facultades, tienen que adoptar las medidas necesarias, adecuadas y pertinentes con el objeto de restablecer los derechos quebrantados de las víctimas en la medida de lo posible y aplicar las sanciones previstas a los responsables, ya que solo así se pueden sentar las bases de la convivencia pacífica entre los individuos y lograr un orden social justo, ambos valores fundamentales de nuestro régimen constitucional.

Pero es la Sentencia C-228 de 2002, con la ponencia de los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett la que integrando derechos fundamentales de la víctima permiten dar esta categoría al derecho de obtener una reparación, tanto a las víctimas de delitos<sup>25</sup>, como a las víctimas del abuso del poder, cuando adveran que

De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia –no restringida exclusivamente a una reparación económica– fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros.

(iii) **Derecho a la dignidad.** La dignidad hace del hombre un ser autónomo, indisponible e inviolable, constituyéndolo en sujeto de derechos

---

<sup>25</sup> **Principio 1.** Víctimas de delitos. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

Debe considerarse que siendo la Resolución interlocutoria de 18 de mayo de 2006 dictada por la Fiscalía Décima Especializada, manifiestamente contraria a la ley procesal penal, configura el delito de Prevaricato -por acción u omisión- en contra del funcionario que la dictó.

inherentes. Por eso nuestra Constitución declara en su artículo primero que el Estado colombiano se funda en el respeto de la dignidad humana; derecho que se quebranta cuando “(...) se lo convierte [a] en medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es “un fin en sí misma” como ya quedó dicho<sup>26</sup>.

Los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder señalan en su Principio cuarto que “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional”. La Dignidad “Es un derecho que implica tanto obligaciones de no hacer como obligaciones de hacer por parte del Estado” y “El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es un fin en sí mismo y no puede ser considerado un medio en relación con fines ajenos a él”<sup>27</sup>.

Se vulnera ese derecho fundamental a la Dignidad, cuando al margen de las normas Constitucionales, el Bloque de constitucionalidad y las normas procedimentales penales vigentes para la época, que fueron debidamente señaladas en la demanda de reparación directa, se niega el derecho a obtener una reparación mediante dos párrafos simples que no contienen verdaderos fundamentos jurídicos de fondo sino apenas frases ecuménicas que constituyen defectos procedimental y fáctico; frases como “(...) las decisiones y medidas proferidas por la Fiscalía General de la Nación en contra del demandante” no fueron injustas “sino bien por el contrario, el resultado del análisis de los requisitos que el estatuto procesal y sustantivo penal vigente para esa época exigían; o fueron “el fiel seguimiento de los condicionamientos que la ley impuso a la Fiscalía en materia de detención del señor Ramírez Pontón”, que por lo tanto “no permiten apoyar la definición de la responsabilidad deprecada en la demanda (...)”

Lo anterior tanto más porque tales expresiones son fuente de **revictimización**. En el Anexo al informe Final del Relator Especial sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, E/CN.4/2000/6 presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 2000, conocido como *Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones*, en materia de tratamiento de las víctimas se sugiere en el Principio décimo que:

---

<sup>26</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-511 de 1993.

<sup>27</sup> BOHÓRQUEZ BOTERO, Luís Fernando y otro. Diccionario Jurídico Colombiano. Quinta edición: 2004. Páginas 863 y 864.

Las víctimas deberían ser tratadas por el Estado y, en su caso, por las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y por las empresas privadas, con compasión y respeto por su dignidad y sus derechos humanos, y deberían adoptarse medidas apropiadas para garantizar su seguridad e intimidad, así como las de sus familias. El Estado debería velar porque, en la medida de lo posible, el derecho interno previera para las víctimas de violencias o traumas una consideración y atención especiales, a fin de evitar que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a lograr justicia y reparación den lugar a un nuevo trauma.

El tratadista y profesor Antonio Beristain Ipiña entiende por victimización secundaria o revictimización “... los sufrimientos que a las víctimas, a los testigos y mayormente a los sujetos pasivos de un delito les infieren las instituciones más o menos directamente encargadas de hacer justicia: policías, jueces, peritos, criminólogos, etc.”<sup>28</sup>; en tanto que para Carolina Gutiérrez de Piñeres Botero la victimización secundaria

(...) supone, un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional, involucrando una pérdida de comprensión acerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras y generando una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las instituciones para dar respuesta a las necesidades de las mismas<sup>29</sup>.

Y agrega la autora:

Del mismo modo, autores como Montada (1991; 1994) y Albarrán (2003) consideran que [...] la víctima reexperimenta una nueva violación a sus derechos legítimos, cuando la policía, las instituciones sociales y gubernamentales intervienen con el fin de reparar la situación de la víctima, a nivel económico, social, físico y psicológico.

## 5

### Ausencia de otros mecanismos de Defensa judicial

---

---

<sup>28</sup> **BERISTAIN IPIÑA, Antonio.** (1998) *Criminología y victimología -Alternativas Re-creadoras al delito-*. Grupo Editorial Leyer. Bogotá. Página 225.

<sup>29</sup> **GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, Carolina** y otros (2009). *Revisión teórica del concepto de Victimización Secundaria*. Liberabit. Revista de Psicología. Volumen 15. Número 1. 2009. Universidad de San Martín de Porres. Perú. Recuperado de: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=68611923006>.



Es procedente la acción de tutela aquí interpuesta por cuanto que las cuestiones que se discuten como lesiones a derechos fundamentales son consecuencias directas de los actos procesales adoptados en la Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto SÁCHICA Méndez; Sentencia que fuera debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020

Esta Sentencia no solo revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 19 de agosto de 2014 denegando las pretensiones de la demanda de reparación directa en el proceso bajo radicación número 760012333000201200476 01 (52.799) y donde figuran como víctimas del poder los señores Cristian Esteban Ramírez Pontón, sus hijas Katherine y Vanessa Ramírez Tobar; su compañera permanente Luz Stella Hincapié García y sus hijos comunes Christian Esteban y Joan Sebastián Ramírez Hincapié; sus padres Miguel Angel Ramírez y Martha Lucía Pontón de Ramírez; sus hermanos Betty Lucy, Miguel Angel y Fredeth Ramírez Pontón y como demandada La Nación-Fiscalía General de la Nación; sino que en el extremo de revictimización condenó “a la parte actora a pagar, como agencias en derecho, la suma de 3 SMLM, además de las costas que se hubieren causado en la primera instancia. Para lo anterior, el Tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso”.

Pero además esta solicitud de amparo constitucional es procedente porque no existe en este momento procesal un recurso judicial ordinario, u otro medio o mecanismo alternativo **eficaz e inmediato** para la defensa de sus derechos fundamentales. Tal como lo indican los artículos 243 y armónicamente el 247 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso de apelación solo procede y tramita para las sentencias de primera instancia. Además, respecto de la Sentencia que aquí se cuestiona no se dan las causales de revisión contenidas en el artículo 250 de la misma Ley procesal.

Ante la evidencia de vulneración a los derechos fundamentales de mis representados, solicito al Honorable Consejo de Estado, proceda a declarar su amparo y como consecuencia deje sin efectos la Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto Sáchica Méndez; Sentencia que fuera debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020 y que se ordene a la misma Subsección, que en un término perentorio se profiera sentencia de fondo atendiendo las directrices de la decisión de ámbito constitucional.

**7**

## **Declaración jurada**

---

Bajo la gravedad del juramento que entiendo prestado con la sola presentación de este escrito declaro que no he interpuesto ante otro Juez o Tribunal la misma Acción de Tutela por estos hechos, ni contra la Sentencia aquí citada; lo que igualmente se predica de quienes aquí también tienen el carácter de accionantes.

**8**

## **Anexos**

---

Los documentos que se acompañan a esta Acción de Tutela se presentan en archivos separados así:

- 8.1. Printer de la Consulta de Procesos en la página de la Rama Judicial donde se precisa que la Sentencia administrativa accionada fue debidamente publicada mediante Notificación 17029 y Estado

Sentencia fijado en la página web del Consejo de Estado de fecha 21 de octubre de 2020.

- 8.2. Poder debidamente otorgado por los señores Cristian Ramírez Pontón, su esposa Luz Stella Hincapié García y su hijo Joan Sebastián Ramírez Hincapié, actualmente presentes en el país, para interponer la acción de tutela.
- 8.3. Sentencia de segunda instancia proferida el día 13 de Agosto de 2020 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, en proceso de reparación directa radicado bajo partida 760012333000201200476 01 (52.799), de la cual fuera Consejero ponente el doctor José Roberto Sáchica Méndez;
- 8.4. Resolución Interlocutoria del 18 de mayo de 2006 proferida por la Fiscalía Décima Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal bajo radicación número 1659 L.A. .
- 8.5. Providencia del 4 de agosto de 2006 de la Fiscalía Décima Especializada, Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá que resolvió la solicitud de revocatoria de la detención domiciliaria manteniendo la medida de aseguramiento.
- 8.6. Auto del 15 de junio de 2007 de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó integralmente la decisión.
- 8.7. Resolución de acusación del 25 de abril de 2007 proferida por la Fiscalía Décima de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá.
- 8.8. Providencia del 16 de marzo de 2009 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, mediante el cual se revocó la de detención domiciliaria y se ordenó su libertad inmediata, considerando que los fines de la medida de aseguramiento no se cumplían, por cuanto los procesados no representaban un peligro para la sociedad y se carecía de prueba que dilucidara alguna intervención indebida en el proceso.

- 8.9. Sentencia absolutoria del 27 de julio de 2010, ejecutoriada el 7 de septiembre siguiente y proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali que absolvió al señor Cristian Ramírez Pontón del delito de lavado de activos.
- 8.10. Demanda de Reparación Directa presentada el día 15 de noviembre de 2012, donde aparecen como demandantes el Señor Cristian Ramírez Pontón y su núcleo familiar.
- 8.11. Alegato de conclusión presentado ante el Tribunal Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en proceso de reparación directa radicado bajo el número 2010-01121.

## 9

### Notificaciones

---

Las recibiré en mi domicilio profesional en la carrera cuarta número 11-45, Edificio Banco de Bogotá de la Plaza de Caicedo, oficinas 709 y 711, teléfono 8805981 de Cali, correo electrónico [gerardoderechopenal@yahoo.es](mailto:gerardoderechopenal@yahoo.es)

Atentamente,



José Gerardo Atehortúa Cruz.  
C.C. # 14'871.360 de Buga.  
T.P. # 11.041 C. S. de la J.

Santiago de Cali, doce de abril de 2021.